
Modernización de la ciudad

y de la vivienda popular en Bogotá, 1920-1977

Modernization of the city and low-income housing
in Bogotá, 1920-1977

Mauricio Téllez Vera

Escuela Superior de Administración Pública
Estudios de Postgrado en Geografía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Convenio Instituto Geografico Agustín Codazzi (IGAC)
Grupo de Investigación en Geografía y Ordenamiento Territorial (GEOT)
Bogotá, Colombia
mauricio.tellez@esap.edu.co; mauricio.tellez@uptc.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-0314-6916>

Resumen

La modernización es uno de los conceptos más importantes para entender la ciudad, sus dinámicas institucionales y sociales. Es importante diferenciarlo de otros conceptos asociados. El presente texto pretende hacer un panorama de las miradas modernizadoras oficiales referidas a la ciudad de Bogotá y a la vivienda dentro del periodo señalado (1920-1977), contrastarlas con las experiencias y vivencias de la gente que llega a la ciudad expulsada del campo y que no es tenida en cuenta por estas miradas, se organiza y la construye por su propia cuenta.

PALABRAS CLAVE: modernización; ciudad; vivienda; vivienda popular; Bogotá.

Abstract

Modernization is one of the most important concepts for understanding institutional and social dynamics of the cities. It is important to differentiate it from other associated concepts. This text aims to provide an overview of the official modernizing views on the city of Bogotá and housing during this period, face them with the experiences of the people who arrived to the city expelled from the countryside. Those new Bogotá residents are aside, they need to organize and built by themselves.

KEYWORDS: modernization; city; housing; low-income housing.

“Mire, lo que está pasando ahora y en todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo, y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos: primero, la injusticia de la justicia; y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal”.

GUSTAVO CALLE, *La estrategia del caracol*

1. Introducción

En el anterior fragmento del film colombiano de Sergio Cabrera ‘La estrategia del caracol’ (1993), se expresan dos cosas con claridad: se distingue entre los que abordan las dinámicas urbanas y entienden la ciudad de Bogotá como una cosa, como un objeto sin vida; son aquellos que ordenan y ejecutan los desalojos y tienen en sus manos la justicia, y entre los que habitan la ciudad, la experimentan, y la ven como un organismo vivo, como un proceso no terminado, sino como algo que se está haciendo -y se está haciendo por ellos-, pero sufren los desalojos y no se han organizado para resistir. Detrás de esta manera de expresarlo también está lo dicho por diferentes autores que lo han planteado de dos maneras diferentes y complementarias: los que diferencian la modernización, la modernidad y el modernismo; y los que distinguen el proceso de la modernización no solo a través de un actor sino de varios y tienen en cuenta la diversidad de vivencias e intereses.

Berman (1988, 2002) define y relaciona a la vez la modernización, el modernismo y la modernidad. La modernización la asocia con el perpetuo devenir, con el proceso socioeconómico; el modernismo lo entiende en plural, como formas de conciencia, valores y visiones de la modernidad; y esta última la concibe como una experiencia vital. Entre ellos se conforma una totalidad dialéctica que es económica, social y cultural, los tres conceptos no se pueden separar, ni entender desde concepciones reduccionistas. Harvey (2003, 2004,

2008) recoge y se centra en esta relación; pone un acento en la continuidad temporal y la vincula con la transformación económico-política. Berman y Harvey toman esa relación y esos conceptos como una manera de aproximarse a las certezas históricas y geográficas del capitalismo, asumiendo una lectura alternativa y crítica de aquellas que consideran los tres conceptos como sinónimos, los compartimentalizan, separan tiempo y espacio, y la entienden en términos de desarrollo, progreso y evolución; es decir, en la idea de que los seres humanos mejoran infatigablemente sus condiciones de vida. En ese mismo sentido, como veremos, para Colombia Corredor (1992) habla de modernización incompleta, y Carvajal (2011) distingue dos enfoques del ordenamiento territorial.

El texto está dividido en cinco partes: en la primera se muestra cómo la situación de violencia en el campo generó un éxodo permanente que conformó el espacio nacional y el desarrollo urbano, señalando algunas particularidades de Colombia al respecto; en la segunda se aborda la ciudad y la vivienda en los primeros años del siglo XX de la mano de la morfología, de algunos datos de población y se plantean las dos formas de modernización; en la tercera se tocan las políticas públicas urbanas y de vivienda y su vínculo con la informalidad; se exponen las apuestas de las primeras, su relación con la vivienda y los efectos en los barrios populares desde principios del siglo pasado hasta finales de la década de los años 70; la cuarta parte está dedicada a presentar

falsa dicotomía entre la ciudad formal y ciudad informal, y se distinguen las distintas maneras en que la segunda se ha caracterizado y excluido desde la primera; y, finalmente, en la quinta parte se hace una aproximación al papel jugado por los barrios populares en la configuración de Bogotá.

El espacio urbano de Bogotá fue utilizado durante buena parte del siglo XX para gestionar los conflictos sociales y para generar estabilidad en la dominación política propia de las relaciones capitalistas de producción. Allí podemos distinguir por lo menos dos momentos de las dinámicas de modernización: la primera es una transición que se inicia con el fin de la hegemonía conservadora en 1930; es la denominada república liberal y se extiende hasta 1948, asociada con la organización institucional del estado; la segunda, se asocia con los efectos del asesinato de Gaitán, el golpe militar y el establecimiento del Frente Nacional (1958-1974) y los cambios económicos y demográficos, y va hasta el paro nacional de 1977; en ella la ciudad es escenario de protestas e invasiones.

2. Violencia en el campo, éxodo y ciudad

Según Aprile y Mosquera (1978) y Aprile (2007), el periodo entre 1850 y 1950 es clave en el poblamiento territorial; en él se produjeron las condiciones anteriores para el proceso de urbanización moderna, se pasó de un país de ínsulas aisladas a una sociedad agraria que engendró una serie de poblados y aldeas, que fueron el origen de la ciudad contemporánea. Todo esto fue generado por factores económicos, asociados con el interés de insertar el país en el mercado externo, y con factores sociales que se desarrollaron en torno a la tenencia de la tierra y la colonización a manos de esclavos y campesinos mestizos pobres que amplió la frontera. A finales del siglo XIX y principios del XX, se adelantó la colonización

popular agraria generada por la migración de población que ocupó las vertientes de la región central en los departamentos Cundinamarca, Huila, Tolima, Caldas, Antioquia y Santanderes, en busca de tierras más fértiles más allá de las haciendas. La producción cafetera fue rentable para algunos negociantes foráneos y eso atrajo más migraciones hacia las laderas vírgenes que no estaban pobladas, ni tituladas, es decir, hacia tierras baldías. Fueron los colonos pioneros, los campesinos sin tierra los que jalan ese proceso que inicialmente es pacífico y poco a poco se va tornando conflictivo; el minifundio le va dando paulatinamente paso al latifundio que se inicia con la presencia del mercader foráneo que se aprovecha del trabajo campesino, presiona y compra las mejoras y se convierte en señor y amo de las fundaciones. El colono campesino vuelve a emigrar y se repite el ciclo. La lucha es por la tenencia de tierras baldías entre colonos pioneros y especuladores, pues estos le presentan al Estado bonos de deuda pública y reciben su titulación, constituyéndose así una guerra agraria que es la que se expresa a mediados del siglo XX y que motivo nuevos desplazamientos y destierro. Para Aprile, la violencia agraria es la partera de la ciudad colombiana.

Un ejemplo dentro de este marco general son los desplazados forzados por las denominadas guerras de Villarrica, un municipio del oriente del Tolima. Allí los colonos campesinos convivían en armonía, cultivaban café en los baldíos, cuidaban la tierra en sus parcelas, la consideraban su hogar, exigían pan barato, vida digna y techo decente, estaban organizados en ligas y asociaciones, y a principios de la década de los años 50s no habían sido afectados por los colores y odios partidistas; pero la especulación y los intereses de los hacendados y las compañías cafeteras empezaron a expulsarlos y a apoderarse de sus mejoras, apoyados por la policía conservadora y

las guerrillas de la paz con mercenarios asolan las veredas, desconocieron la posesión de la tierra y la adquirieron a precios irrisorios con documentos ficticios y titulaciones fraudulentas e imponiendo sus normas y condiciones. Aquellos se soportaban en La Ley 200 de 1936 que les otorgaba beneficios, estos en la Ley 100 de 1944 que declaraba de conveniencia pública los contratos de aparcería y la sujeción de los labriegos.

Después de la dictadura del general Rojas Pinilla vino primero la amnistía de 1953, luego el incumplimiento de los compromisos pactados de parte del gobierno y la presencia de mercenarios y de diferentes compañías, y después los ataques y bombardeos indiscriminados del ejército nacional, y el uso de bombas napalm, de parte del Batallón Colombia, después de que el general señalara a los campesinos como comunistas. Villarrica fue el único municipio donde los campesinos no aceptaron el chantaje y donde se inició el movimiento agrario de resistencia (Peralta, 2017). La violencia bipartidista ocasionó las migraciones, los desplazamientos y los éxodos rurales y la urbanización en Colombia.

Estos trabajos y estos argumentos son referencias ineludibles para el estudio de los antecedentes de la urbanización en nuestro país, ya que constituyen el acercamiento mejor fundado al conjunto rural urbano, entendido como una unidad, como una totalidad sobre la cual se puede explicar tanto los orígenes, como el proceso como las particularidades de la ciudad colombiana que son indisociables de las del campo. En ese periodo (1850-1950) se definió su génesis a partir de la colonización popular agraria de la región central definida por las cordilleras oriental y central. Esta región se utilizó para la producción de café; fue allí donde se realizaron fundaciones de caseríos de parte de familias de colonos pioneros quienes realizaron las mejoras y la valorización en dichas vertientes, colonización que inicialmente fue

pacífica y se volvió conflictiva después de la mitad del siglo pasado con el arribo de mercaderes foráneos y de los nuevos colonos comerciantes, que construyeron grandes fundos e introdujeron ganado y se hicieron de las tierras con bonos de deuda pública e implantaron el latifundio y ampliaron el mercado de café a nivel internacional (Sánchez, 2007, 2008).

Los planteamientos teóricos de Aprile y Mosquera sobre la migración y la relación estrecha entre esta y el crecimiento urbano, se distancia de las soportadas en el factor económico que aporta, pero no explica los cambios externos en la estructuración del territorio, y señala que en Colombia, a diferencia de otros países, fueron los factores sociales los que desembocaron en la violencia y desataron las pugnas políticas y los conflictos de tierras tanto entorno de los baldíos del campo como en las ciudades. Es decir, en nuestro país hay un problema histórico por las tierras no solo en el campo, sino en las ciudades y las migraciones, los éxodos masivos y prolongados generaron expulsión, desarraigo y destierro; aquí no fueron pacíficas, voluntarias u originadas por la atracción de los polos urbanos, sino a la brava en el marco del autoritarismo y del Estado de Sitio presente en los gobiernos que antecedieron el Frente Nacional y durante el mismo. Los conflictos agrarios se convirtieron en un pretexto político en todo el sistema urbano nacional. Los conflictos entre los que necesitan la tierra y los que la tienen inicialmente en el campo se multiplica en las ciudades porque los que llegan cada vez son más, mientras que la tierra es cada vez menos.

En Colombia se han vivido dos grandes momentos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Ambos se relacionan con acontecimientos fundamentales: el primero de ellos se asocia con la fundación de la ciudad cuando se dan procesos de abandono territorial de las comunidades indígenas, con ella se crean nuevos

territorios imperiales para España, a través de la conquista y la colonización se establece la cuadrícula y se ordena el espacio público; el segundo se asocia con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando se destruye parte de la ciudad y se abren paso los flujos mercantiles y de consumo a partir de la cuadriculación, del paso de la plaza como centro político a la autopista y a los centros comerciales. En este último, los campesinos que habían territorializado las vertientes de la región central fueron desterritorializados por los terratenientes como habíamos planteado. Ese evento es el rodeo que se aprovecha para transformar el centro de Bogotá y permitir la entrada del capital industrial superando los obstáculos a la modernización; desde ese momento se posiciona la planeación y la zonificación urbana, y con ellas la visión descendente. Es el momento en el que el pueblo constituido por los migrantes y los sectores populares se hace presente (Aprile y Mosquera, 1978; Lichilin, 1997, 1998).

Esta colonización popular expresada en términos numéricos imprimió a nivel cualitativo, las transformaciones espaciales y los procesos de inclusión y establecimiento en las ciudades. Dicho de otra manera, la colonización popular rural se transformó en urbana y allí ya no fueron los baldíos nacionales, sino los ejidos municipales las tierras en disputa. Y ahí reside la otra particularidad colombiana, el proceso de migración interior a la ciudad se soporta en las redes de relaciones familiares, de amigos, de compadres, esas redes explican el apoyo mutuo, la organización, la solidaridad que se pensaban como propios de las tradiciones rurales se convierten en centrales a la hora de sobrevivir en la ciudad, pues están presentes en toda ella. Por eso es que lo planteado por el enfoque marginalista de Turner (1969, 1966) de que la movilidad de los migrantes tienen referencia en los inquilinatos del centro, y termina en los asentamientos periféricos, no se

puede confirmar en Bogotá, pues por una parte, su oferta en el centro fue cada vez menor, y cada vez mayor en los asentamientos periféricos; y por otra, para los migrantes eran insoportables el hacinamiento, las exigencias y los abusos de los arrendadores, sus traslados permanentes se comprenden por la necesidad de más espacio y por el deseo de tener servicios y ser propietario de vivienda. La ciudad colombiana es producción del trabajo, de esa colonización popular, las invasiones y tomas de tierras hacen parte integral de la urbanización (Aprile y Mosquera 1978, Turner 1966,1969; Cardona 1973; Vernez, 1976).

3. La ciudad y la vivienda a principios de siglo

Iniciando el siglo pasado Bogotá era una ciudad de menos de 100.000 habitantes, no contaba con muchos vehículos. Aun así, el bullicio, y las sensaciones que generaban los automóviles, camiones y buses sorprendía a los recién llegados. Todo les atrapaba desde su arribo al centro de la ciudad, el hervidero de gente, el espectáculo de luces y el movimiento. Los ‘gamines’ (niños de la calle) ya estaban por las calles en la segunda y tercera década del siglo XX. Se podía caminar por ella a pesar del clima frío y la llovizna que siempre la han caracterizado.

Según los censos de 1905,1912 y 1918 la población de Bogotá aumentaba cada vez más (Estrada, 2015). De la mano de ello cambio la vivienda, aumentó la densificación y se dieron nuevos patrones de loteo. La manzana colonial-republicana, asociada con la familia extensa, numerosa servidumbre, amplios jardines y huertos, se tornó obsoleta; los lotes son así cada vez más pequeños y las construcciones más repetitivas. La vivienda y el lote tipo heredada de las clases pudientes del siglo XIX estaba compuesta por cinco áreas: dos solares interiores diferenciados en su tratamiento, uno

principal ornamentado y el otro de servicios; un salón vinculado con la calle a través de ventanas, y en relación con el solar principal; un comedor central entre los dos solares; unas alcobas comunicadas con los solares y a través de corredores; y unos espacios de servicio, una cocina y a veces un sanitario. De acuerdo con Arango (1989), estas áreas o zonas funcionales son comunes en casi todas las clases sociales, diferenciándose solo en los materiales y en la elaboración de las fachadas y aún hoy está presente en pueblos y ciudades pequeñas; esta vivienda y lote tipo se corresponde con la familia nucleada; la aparición del sanitario en la vivienda es tardía, inicialmente era una letrina, el área de aseo quedaba en los solares; estos eran anteriormente considerados un servicio público y se asociaba con un acto social. Las excepciones son los dos extremos sociales los más pobres y los más encumbrados; los pasajes eran la vivienda de los primeros, su distribución y características son las mismas de los inquilinatos, un pasaje cerrado por un portón o una cancela; allí se compartían los servicios -cocinas o estufas, lavaderos, y sanitarios- con otras familias, y cada unidad ocupaba uno o dos cuartos. Esto en las mejores condiciones muchas veces las separaciones espaciales eran cortinas de cretona, con espacios sin ningún tipo de iluminación, estrechos y húmedos. Los cinturones de miseria ya estaban presentes, continuaban los patrones indígenas y eran hechos en bahareque y paja, conformados por uno o dos espacios interiores; estos y los inquilinatos era considerados como lugares insalubres, y escenario de la promiscuidad, por ello incomodaban a los expertos y a las instituciones originándose las propuestas higienistas y reformadoras desde principios del siglo XX. Las casonas del centro que se vinieron poco a poco a menos fueron convertidas en inquilinatos y sus propietarios se fueron cada vez más al norte ante las incomodidades que les generaban los barrios populares de la época. Fuera de las

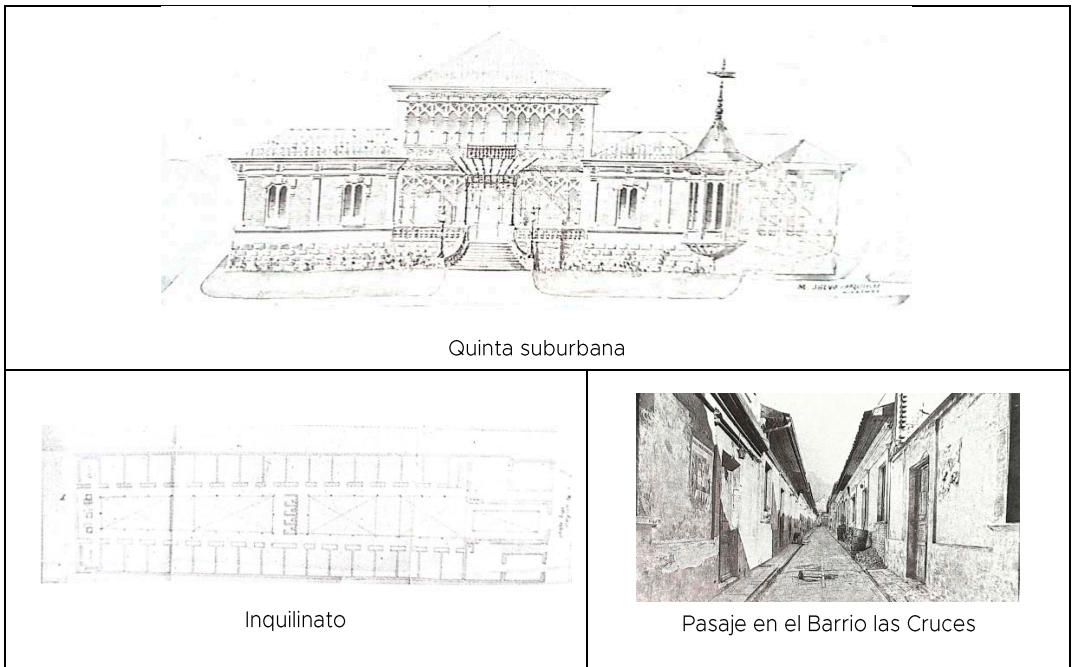
ciudades, pero en sus proximidades estaban las quintas, inicialmente secundarias cada vez más convertidas en casas de habitación permanente dieron origen a los barrios alejados de la clase alta; algunas de las que estaban en las entradas de Bogotá estaban cercadas de árboles y jardines de especies finas, eran construidas en la mitad de los predios y estaban dotadas con murallas de piedra y balcones de balaustres como escenarios de una vida retraída (FIGURA 1).

Los 'guaches', parias, los provincianos recién llegados, los usurpadores eran mezclados y se diferenciaron de los que ya estaban desde antes, de los 'chirriados', de las familias de los 'cachacos' respetables, de los 'pura sangre', de los no mezclados. Los primeros llegaron para quedarse y muy pronto desbordaron no solo las áreas centrales, sino que se expandieron por toda la ciudad y por la denominada Sabana de Bogotá. A ellos no les perdonaron su origen humilde como le sucedió a Marco Fidel Suarez con Laureano Gómez y con López Pumarejo, por ello para muchos la única manera de acercarlos a la libertad era forzar el contagio por ósmosis, contagiándolos de cambio por medio de la importación de habitantes (Muji-ca, 1984). Ambos se grupos se diferenciaron y los diferenciaron en varios aspectos. Los primeros aprendieron conductas, a hablar con voz baja, a pronunciar la 'r' con los dientes apretados, a usar expresiones suaves o decorosas, a cambio de las palabras consideradas de mal gusto groseras; aprendieron también a vestirse con colores tristes, realizaron toda clase de 'oficios inútiles' (Ferreira, 2014); fueron carpinteros, albañiles, zapateros, vendedores, revendedores, empleados de oficinas públicas, modistas, sastres, electricistas, criadas, entre muchos otros; algo similar sucedía con su vestimenta, sus costumbres y sus comidas.

Ha habido en el proceso de desarrollo del país una modernización incompleta, una modernización económica sin modernidad; una modernización

FIGURA 1. La vivienda en los dos extremos sociales.

FUENTE: ARANGO, 1989: 144-145



asociada con el modelo liberal de desarrollo que no ha permitido una apertura política, generando desigualdad económica e impulsado la exclusión social y cultural; en últimas ha contenido la modernidad desde la perspectiva del estado (Corredor, 1992).

Como veremos, incluso antes del siglo pasado, se hace presente la diferencia entre dos lógicas de desarrollo y de ordenamiento territorial: la descendente y la ascendente. La primera entiende el desarrollo como crecimiento económico; tiene su origen en el imperio español, es impuesto en la colonia y se prolonga a la república; ve el territorio como un objeto, o como relaciones entre ellos, este es apreciado como un contenedor isomórfico desde una visión horizontal cartográfica cartesiana sobre la que ejerce un poder, una soberanía excluyente; ese territorio es organizado por un estado modernizador, elitista y centralista que lo

divide política y administrativamente para poder practicar su control, para ello diferencia los espacios integrados y los excluidos; desde los años sesenta la teoría de los polos de desarrollo define la industria como central; estas ideas dominan en el panorama durante la Alianza para el Progreso, marcan los primeros planes nacionales de desarrollo, así como el desarrollo urbano y regional y tienen como referencia los países avanzados; sus propósitos con el tiempo no se cumplieron, pues las desigualdades y las exclusiones siguieron en aumento.

La segunda busca alternativas al desarrollo desde las iniciativas locales, valora los aparatos endógenos, la gobernabilidad, los actores y las iniciativas locales, por eso es denominada culturalista; rescata las lógicas microestructurales, plantea un sistema de planificación amplia soportada en la autonomía político-administrativa;

el territorio se concibe desde sus contenidos y desde una perspectiva relacional que incluye no solo los objetos, sino también los sujetos; es propia de comunidades que se apropian de sus territorios, a partir de sus tradiciones y los ven como su expresión histórica y simbólica, por ello, exigen sus derechos, reivindican identidades y establecen estrategias de resistencia, lucha y gobierno (Carvajal. 2011; Peña, 2001, 2008; Bozzano, 2017).

4. Políticas públicas urbanas y de vivienda e informalidad

Los procesos respecto a las políticas de vivienda están interrelacionados y corren paralelos a los planes urbanos. En el siguiente aparte se hace un panorama completo donde se relacionan las políticas públicas urbanas y de vivienda, las miradas que desde ellas se tiene de la informalidad urbana y arquitectónica.

De acuerdo con Saldarriaga (2000), en las primeras dos décadas del siglo XX no había planes urbanos como tal; las municipalidades regían a través de unas disposiciones sencillas. Durante este lapso hubo tres acuerdos, dos que reglamentaron las construcciones, la apertura de calles y la urbanización, y otro que reguló la aplicación de las normas e instituyó la Junta de Obras Públicas.

Solo en 1923 se vio la necesidad de dar a Bogotá una estructura y una forma urbana, controlar su crecimiento y transformación a través de planes urbanos y normativos. Esta se concretó con los planes de ensanche inicialmente con el plano Bogotá Futuro y luego con las propuestas urbanas de Karl Brunner. El primero buscó el aprovechamiento máximo de los terrenos, direccionó el crecimiento especialmente hacía el norte, desde Chapinero hasta la calle 100, hacia el sur solo llegó hasta el río San Cristóbal; en el sentido oriente-occidente a través de un eje vial se conectó con Fontibón que era en ese momento un municipio. La ciudad tomó

una forma dilatada paralela a los cerros orientales, dominados por Monserrate y Guadalupe; alrededor de los mismo se propuso la conservación del paisaje y las fuentes de agua. En él se establecieron dos aspectos: una jerarquía vial según el ancho de esas vías, así como su arborización; de ahí surgen los trazados actuales de la Avenida Caracas en el sentido norte-sur como la arteria principal desde la estación de la sabana hasta Usaquén; hacia el occidente sobresalen la Calle 26 y la Calle 63 que buscaba el camino a Suba; también se clasificaron las plazas según su actividad. Otras propuestas plantearon un trazado vial en diagonal como se ve actualmente en el barrio Gaitán en el norte, y en los barrios inglés y El Claret al sur.

Finalizando la década se creó el Departamento de Urbanismo como dependencia de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Su director Karl Brunner estuvo concentrado en responder a las celebraciones de la fundación de la ciudad; propuso intervenciones en los cuatro puntos cardinales de la ciudad: en el oriente -paseo Bolívar, el parque Nacional y el de la Independencia, y hacia los barrios San Cristóbal, Egipto y La Concordia- planteó planes de arborización, localización de urbanizaciones obreras, equipamiento y ampliación de vías; en el sur planteó edificios públicos, construcción de vivienda y equipamientos; el occidente, es decir entre la estación del ferrocarril y el cementerio, lo planteó como zona industrial; en el norte proyectó vías de integración entre los barrios Chapinero, Marly, Teusaquillo y La Magdalena. Con el plan vial de 1936 se contempló conformar una malla superpuesta a la colonial con trazados de avenidas-parque, con ejes que terminan en monumentos y plazoletas; en la Calle Real o Carrera Séptima localizó los edificios principales a nivel nacional y departamental.

En ese mismo año se empezó la creación de la estructura institucional del estado para la vivienda. La primera de ellas fue el Banco Central

Hipotecario (BCH), que en los años siguientes fue ampliada con el Instituto de Crédito territorial (ICT), y con la Caja de Vivienda Popular (CVP). El ICT fue inicialmente una institución de crédito que fomentaba la construcción de viviendas higiénicas en las áreas rurales (FIGURA 2).

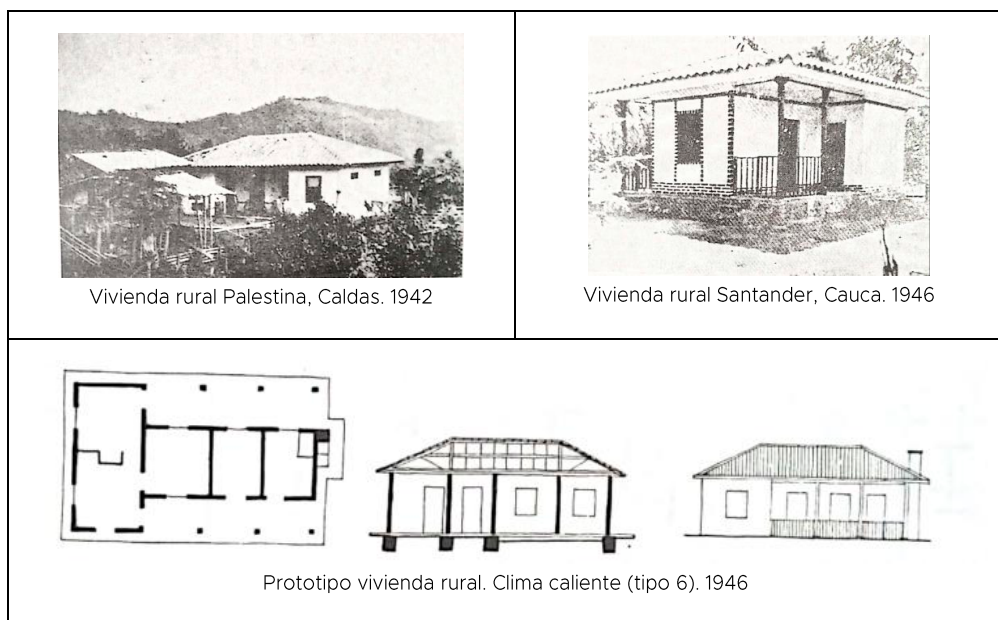
La década de 1940 se caracterizó por una serie de propuestas y contrapropuestas de frente a los proyectos de Brunner. La primera fue el Plan de urbanismo Soto-Bateman de 1944 que incluyó la primera zonificación, y contempló la ejecución y la ampliación de varias vías para descongestionar el centro de la ciudad y vincularlo con las áreas circunvecinas; se prolongó la Caracas, se amplió la carrera séptima hasta el Parque Nacional, la carrera 6 desde el parque Santander hasta la Biblioteca Nacional; la segunda fue el Plan de la Sociedad Colombiana de Arquitectos que creó el Departamento de Planeación Municipal para lograr el control del desarrollo urbano, y allí se propuso vincular la ciudad en sentido norte-sur a partir

de diferentes vías como la Séptima, antigua Calle Real, y la Caracas; hacia el occidente las avenidas de Las Américas y de los Comuneros; y la tercera fue el Plan vial de la Revista Proa que recogió las ideas anteriores y distinguió dos tipos de malla vial según sus dimensiones; de allí surgieron las carreras 30 y 50 con las que se inició la idea de dar a la ciudad un perímetro semicircular.

A mediados de esta década, en el contexto internacional, el Banco Mundial (BM), en el componente de recursos para vivienda, ofreció crédito sin interés, apoyo económico a las naciones para la reducción de la pobreza; y finalizando, a nivel institucional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso la conformación de la asociación de gobiernos global, entre otros objetivos, para el desarrollo económico y social, asuntos humanitarios y los Derechos Humanos.

Con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948, se destruyó parte de la ciudad y se empezó a tomar medidas al respecto de su futuro. Con

FIGURA 2. Proyectos de vivienda rural, ICT.
FUENTE: INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, 1995: 58-60 Y79



el Plan Piloto de Le Corbusier de 1950 y el Plan Regulador Wiener y Sert de 1953, se inicia la planeación moderna a nivel nacional. Para ello, el concejo creó la Oficina del Plano Regulador que dependía de la Alcaldía, ya no de la Secretaría de Obras Públicas. En el Plan Piloto se tomaron cuatro escalas: regional, metropolitana, urbana y de centro cívico; sus principales aspectos fueron la definición del perímetro urbano, la localización de los usos en áreas de la ciudad de acuerdo con la forma urbana, la organización de la circulación y la construcción de un centro cívico adecuado para el carácter de la capital. En ambos planes se puso en práctica la zonificación de la ciudad con usos exclusivos: habitar, trabajar, descansar y circular; se aplicó la teoría sector que buscaba una división de esta en función de un número de residentes y de los requerimientos de equipamiento colectivo, cada sector estaba delimitado por ciertos tipos de vía de acuerdo con el método de clasificación vial. En el Plan Regulador se dejó planteada la posibilidad de adecuar el plan a la medida del cambio de circunstancias, y la necesidad de desarrollar un Plan Regional que contemplara la sabana y una autoridad regional que impidiera el avance del desarrollo urbanístico y arquitectónico que no contemplase el mínimo de condiciones.

Según González (2009), las políticas del Estado respecto a los asentamientos populares para mediados de este siglo ya eran paliativas e insuficientes, y eran influenciadas por los cambios en los estados a nivel mundial; en asentamientos populares ante la escasa labor, construyeron ciudad sin planeación, sin normas de construcción ni de higiene. Las primeras normas al respecto se refirieron a la construcción de las viviendas para obreros. Debido al éxodo generado por la violencia, los migrantes aumentan su presencia de manera incontrolable. Desde las clases dirigentes y de estas políticas, estos asentamientos son vistos como una patología desde una perspectiva formal; es decir,

física y estética, sin consideraciones económicas y sociales (Gilbert y Zorro, 1979).

Con la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-1957) se dejó de lado lo anterior, y se procedió a la construcción rápida de obras de gran magnitud con gran espíritu modernizador, como el Centro Administrativo Oficial (CAO), hoy Centro Administrativo Nacional (CAN), y el Aeropuerto Internacional, el Paseo de los Libertadores, hoy Autopista Norte. Aun así, se retomó la idea de establecer un ente regional con la creación del Distrito Especial de Bogotá, conformado por los municipios de Bogotá, Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Usaquén y Suba. Después de la dictadura, el Plan Piloto Distrital amplió el perímetro urbano e implementó una zonificación que dejó de lado los usos urbanos ya instituidos en la ciudad existente.

Finalizando la década de 1950 a nivel internacional se ofreció financiación multilateral para el desarrollo, económico, social y sostenible de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al inicio de la década de 1960 se realizaron otros tres planes distritales: el de 1957 dividió el distrito en 5 zonas: urbanas residenciales, industriales, semirurales (residencia agrícola), agropecuarias, y de conservación de recursos y recreación; el de 1958 retomó algunos planteamientos realizados como la zonificación y la red vial y lo amplió a otras áreas; el de 1961, durante la alcaldía de Gaitán Cortés, se reorganizó el Departamento de Planeación Distrital, retomó las propuestas viales, amplió el área del Distrito e implementó el Plan Vial Piloto, e incluyó un nuevo sistema de gravámenes por valorización; introdujo nuevas vías como la Boyacá y una zonificación; igualmente consolidó el comercio, la administración e industria en el centro y en Chapinero y clasificó las áreas de vivienda según su densidad, el índice de ocupación y de construcción. Se definió el procedimiento para la aprobación de planos de lotificaciones y reglamentó el reparto de la tierra según el uso, el

área y los frentes mínimas de los lotes y áreas de cesión obligatoria (FIGURA 3).

Se amplió la estructura institucional del estado para responder al problema de la vivienda obrera y de empleados públicos con la creación del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). En esta estructura se identifica un cambio en las políticas estatales: se orienta a suministrar y producir vivienda masiva con el apoyo de la banca y de los préstamos hipotecarios. Todo esto se inició con los gobiernos del Frente Nacional y con los aportes de la Alianza para el Progreso, una estrategia promovida en todo el continente por los Estados Unidos para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana; el primero de ellos, el de Lleras Camargo (1958-1962), con su Programa Nacional de Desarrollo Económico, planteo avances en esa dirección, se adelantaron planes de vivienda con nuevos sistemas de financiación y construcción, rebaja

de intereses y menores costos; en esa dinámica el ICT funcionó como el principal ejecutor (FIGURA 4).

El Estado no fue capaz de detener el proceso de migración generada por la violencia en el campo. Frente a la magnitud del fenómeno, en sus políticas de vivienda, giró hacia una actitud asistencialista, intentó fortalecer las ciudades intermedias como polos de desarrollo y atendió los llamados que valoraron la vitalidad de los asentamientos populares y los vieron como alternativa económica para resolver el déficit de vivienda; se empezó así a hablar de la autoconstrucción, del desarrollo progresivo de la vivienda y de la habilitación de barrios. Las Juntas de Acción Comunal (JAC), creadas en 1959, juegan un papel fundamental, se instrumentalizan para hacer presencia institucional, y, a la vez, los políticos ven en ellas votos, y por ello se generalizan en prácticas clientelistas. La CVP contempla en sus programas la autoconstrucción,

FIGURA 3. Barrio Quiroga 1951-1962, ICT.
FUENTE: INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, 1995: 85

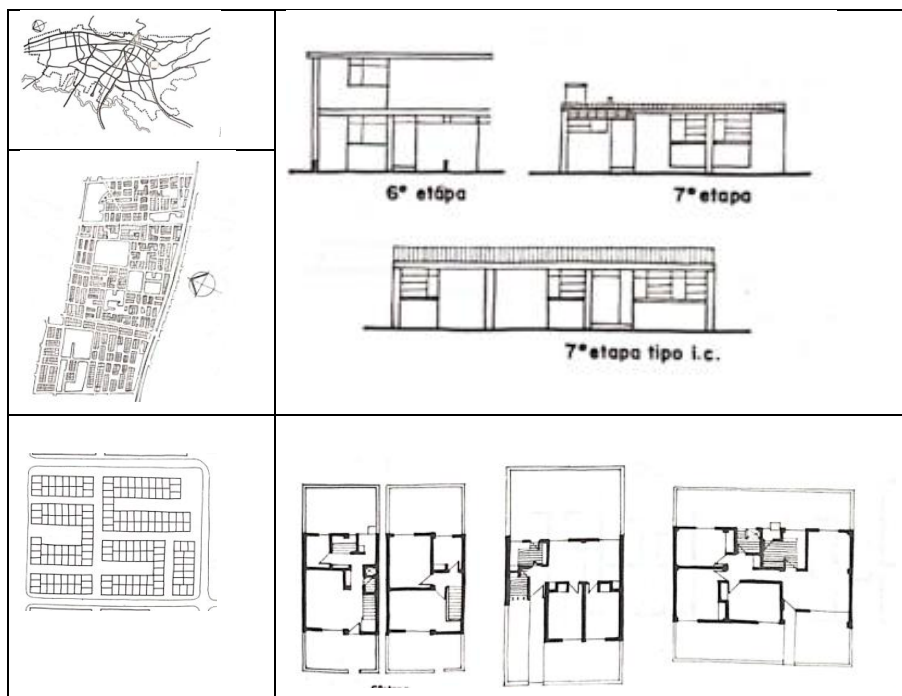
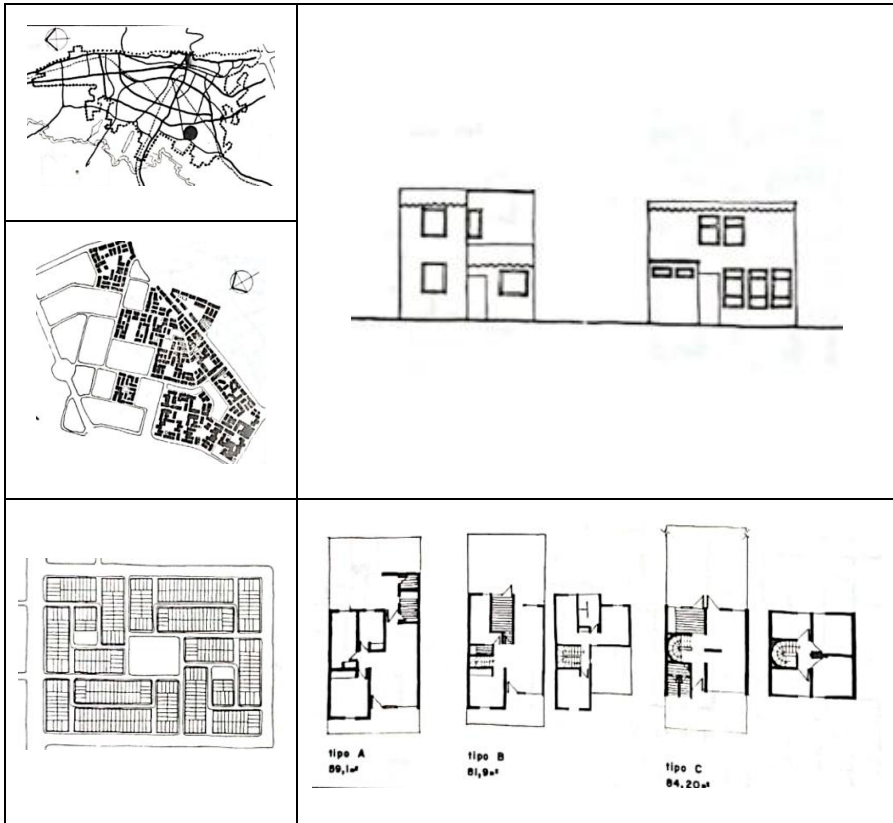


FIGURA 4. Ciudad Kennedy 1961-1973, ICT.

FUENTE: INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, 1995: 142



para planes subsidiados y con asesoría técnica. Asociadas con este proceso, en esa década surgen las primeras disposiciones normativas respecto a los asentamientos populares, se refirieron a la protección de los inquilinos. Dichas disposiciones rechazaron y negaron esos asentamientos y se enfocaban en otros aspectos del desarrollo y el orden urbano, a los migrantes del campo no se les dio mayor importancia aun cuando eran el grueso de la población; la mirada que preponderaba era soportada en la higiene. Predominaba el interés de las clases dominantes y hegemónicas que despreciaban dichos asentamientos, percibidos como tugurios. Aun así, se acelera el proceso de estos asentamientos, las ocupaciones o invasiones, los

barrios piratas, que son construidos y gestionados con la ayuda de las redes clientelares.

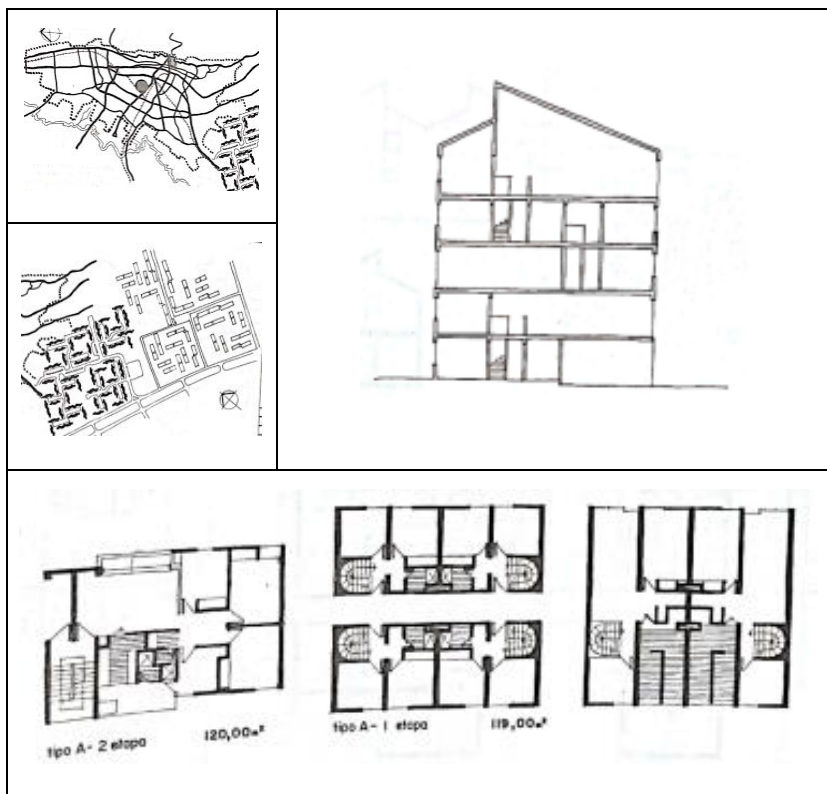
A nivel urbano se le asignó, en 1961, al Departamento de Planeación Distrital la potestad para elaborar el Plano de Zonificación Generalizada; con el plan de 1968 se incluyó una clasificación de usos mucho más compleja. En esta década impactan de manera contundente las ideas de Lauchlin Currie que consideró la variable económica como el principal factor regulador del desarrollo urbano. En 1963 evaluó el impacto del crecimiento de los servicios, realizó propuestas sobre el transporte público, y la zonificación y el control de la expansión de la ciudad, Bogotá es tomada como un problema nacional. Posteriormente, propuso alternativas

para el desarrollo y definió siete políticas que propusieron una urbanización equilibrada, el estudio de ciudades económicamente independientes, y la atención preferencial al desarrollo urbano y la vivienda de los planes nacionales de desarrollo. Terminando esta década, se buscó el control de las urbanizaciones privadas y a nivel internacional, en cuanto a planificación y ordenamiento, se formuló el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) para combatir la pobreza (FIGURA 5).

Las ideas de Currie fueron aplicadas en el Plan de las Cuatro Estrategias de Pastrana (1970-1974), el último del Frente Nacional. La construcción toma protagonismo y la vivienda se promulga como motor de desarrollo, se implanta la Unidad

de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) como estrategia de ahorro y crédito, se conforman las Corporaciones de Ahorro y Vivienda (CAVS) y también se presenta un proyecto de Ley de Reforma Urbana. El Estado implementó normas para enfrentar lo que considera 'el problema de la informalidad', se va transformando y asumiendo su papel como agente en interacción con otros en la implementación de la política pública, y les da cabida poco a poco. No representa inicialmente mucho para los pobladores, en los lugares de llegada su aparato de poder se desconoce. Su ausencia, su no presencia física, implica su no intervención o su desgobierno. En todo caso, los asentamientos populares no son percibidos de la misma manera por las diferentes instancias de la

FIGURA 5. Paulo VI 1967-1980, ICT.
FUENTE: INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL, 199:5148




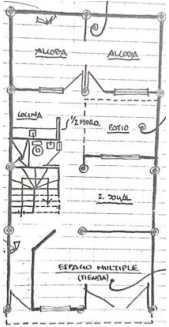

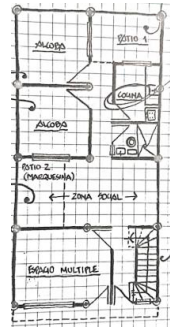
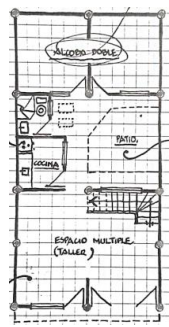

administración; estos siguen surgiendo paulatinamente y su consolidación corre paralela a las acciones de los gobiernos (FIGURA 6).

En los primeros años de la década de 1970 se realizaron los estudios Fase 1 y Fase 2 que confluyeron en el Plan de Estructura para la Ciudad. El primero consistió en un diagnóstico y en unas recomendaciones para su desarrollo; el segundo realizó proyecciones poblacionales y un escenario posible de crecimiento. El transporte es definido como herramienta central con relación a los programas de vivienda y con otros planteamientos; recomendó una estructura policéntrica, apoyada en la consolidación del área edificada, y trazó el desarrollo futuro en tres direcciones occidente CAN-Fontibón, noroccidente Suba-Engativá y sur Soacha apoyados en la creación de nuevos centros

de empleo y en vivienda alrededor de estos; complementariamente se propuso, por una parte, la protección de la sabana del ímpetu inmobiliario y la creación de una entidad metropolitana regional. En 1974, el alcalde Fernández de Soto adoptó su contenido, pero sin claridad en la normativa y sin instrumentos administrativos y financieros. Un año después sucedió algo similar con la política de ‘Ciudades dentro de la Ciudad’ derivada del plan de desarrollo de López Michelsen denominado ‘Para cerrar la Brecha’.

En 1979, mediante un Acuerdo 7, se adopta el Plan Nacional de Desarrollo Integrado con el que se concreta la variable económica como central, que favorece el mercado inmobiliario y se robustece el UPAC y las CAVS. Dicho acuerdo planteó dos políticas: la que buscaba contener y regular

FIGURA 6. Vivienda popular

				
	<p>Casa Tienda</p>	<p>Casa Compartida</p>	<p>Con doble patio</p>	<p>Casa-taller</p>
<p>Carvajalino 1995: 84-87</p>				

el crecimiento urbano mediante distintas disposiciones –diferenciación del perímetro urbano del de servicios, planificación de usos diferentes al agrícola entre ambos, y densificación del espacio urbano y la de estructura urbana soportada en la interrelación de tres variables: estructura, forma y áreas de actividad, la primera relacionó los centros de actividad múltiple y los ejes de tráfico lento; la segunda consolidó la configuración semicircular y la tercera diferenció las áreas según su uso y su impacto. Este acuerdo incluyó también dos aspectos nuevos: los tratamientos de desarrollo, de redesarrollo, de rehabilitación y de conservación, según el carácter de cada sector y diferenció dos tipos de régimen para su aplicación.

En 1980 se planteó un Plan Vial que diferenció tres subsistemas: el arterial que distinguió los enlaces primario o interurbano, el básico referido al transporte público colectivo, y el local conformado por vías vehiculares; incluyó también las zonas de reserva para transporte masivo. Para estos mismos años se reglamentaron contenidos y procesos de los planes de desarrollo integral, así como las medidas sanitarias para construcciones, las normas mínimas de urbanización y se creó la superintendencia para el control de la enajenación de vivienda. En esta década, el Estado ya no intenta contener las oleadas migratorias, sino las encauza e integra los habitantes en las dinámicas económicas, sociales y espaciales de la ciudad. En la agenda internacional se llevó a cabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I) en Vancouver en 1976, que recomendó apurar los vínculos entre las políticas sectoriales de vivienda, asentamientos humanos y la política global de desarrollo.

El paso de la negación de los asentamientos populares al del asistencialismo y la promoción comunitaria se registra en el cambio de un lenguaje despectivo y peyorativo -barrios clandestinos o ilegales- a uno técnico y jurídico -barrios de

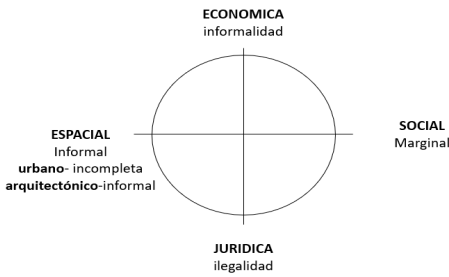
desarrollo incompleto. Ese paso de un momento a otro se ilustra en tres dimensiones de la política pública (Torres, 1993): **a.** La ampliación repetida del perímetro urbano y sanitario revela por lo menos cuatro cosas: la inutilidad del instrumento de control del desarrollo urbano; la incapacidad de la institucionalidad para hacerlo cumplir; el beneplácito hacia los barrios surgidos por fuera de este y la condescendencia frente a presiones de diferentes grupos; **b.** Los cambios en las normas de urbanización y construcción que evidencian, que ya habíamos anotado, la complicidad con los urbanizadoras piratas y la represión de las invasiones, y la normalización o regulación de los barrios. **c.** Los procesos de rehabilitación de barrios ilegales impulsados por la alcaldía de Barco, por las directrices de Patricio Samper desde el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y por la acción de la CVP que intentaron integrar los barrios al orden urbano como se verá en el Barrio Las Colinas más adelante.

5. Ciudad formal y ciudad informal

La diferenciación entre la ciudad formal y la ciudad informal reafirma una condición de exclusión de la primera sobre la segunda: a nivel espacial -a escala urbana- se la ve incompleta, a nivel arquitectónico como carente de forma, como no-arquitectura; a nivel social, como la propia de los marginados, de los excluidos; a nivel económico también como informal, pero en cuanto a que sus habitantes no están vinculados a las actividades industriales como obreros, y tuvieron que emplearse en la construcción, en los servicios, en pequeñas empresas manufactureras o desarrollar estrategias de sobrevivencia y autogestión; y a nivel legal se les considera como tal, por no haber tenido en cuenta los usos del suelo y las regulaciones normativas (FIGURA 7).

FIGURA 7. Dimensiones de la informalidad.

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE TORRES, 2009



Esa diferencia se corresponde a nivel general con la ciudad de los pobres y la de los ricos, y no se puede reducir, ni antes ni ahora, a los países del denominado tercer mundo, pues está presente también en el primero; es decir, es un problema de mayor escala geográfica y de larga duración histórica, de lo que suele pensarse. La ciudad formal y la informal han coexistido en estrecha correlación. Los habitantes de la ciudad informal continuamente han construido sus barrios y sus viviendas, y siempre también, han sido segregados, por los habitantes de la formal, han sido referidos con los principios de estos y como contraposición a ellos. Aquí es necesaria una aclaración de ciudad informal, no se corresponde con la ciudad ilegal; la informalidad, económica y espacial no es ilegalidad (Torres, 2009). Como en Becht (1934), es ineludible mostrar las dos caras de esa moneda para aclarar las preguntas y definir las respuestas.

Como plantean Hardoy y Satterthwaite (1987), la ciudad informal, la de los sectores populares, estuvo segregada desde el dominio colonial, y la mano de obra y los servicios baratos que proporcionan son esenciales para la economía de la ciudad; sus habitantes invaden terrenos, construyen sus viviendas, y algo similar sucede a nivel de la salud, de los servicios y de la educación. Ellos son los constructores, los hacedores de esa ciudad y poseen unas características históricas y culturales también diferentes de aquella.

Complementariamente, ambas conforman un ‘sistema de percolación espacial’ unidireccional los pobres trabajan donde los ricos, los ricos nunca van donde los pobres y consideran sus lugares de habitación como indeseables y peligrosos. En la ciudad cortesana europea entre los ricos y los pobres no había distancia, había proximidad espacial, pero si había una distancia social. Lo anterior se dio en la ciudad latinoamericana. En el México de los 80s, las familias burguesas tenían una muchacha que se desempeñaba en los quehaceres en sus casas durante toda la semana, era parte de ellas y tenía su espacio muy reducido en las residencias; la municipalidad de León en Nicaragua, en 1902 absorbió a la de Sutiaba y la frontera étnica que había antes se volvió social y se expresa incluso después de la muerte (Musset, 2014). En San Pablo (Brasil) sucedía algo parecido a principios del siglo XX con los migrantes pobres, pero especialmente con los negros que son parte integral de esa nación constituida por migrantes voluntarios e involuntarios (Gattai, 1979).

Las sociedades son injustas y las ciudades que conforman también; estas no expresan sino las ideologías que son la base de su conformación. Por eso no se puede olvidar que el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, no son inalienables del acceso y el derecho al suelo. Ninguno de ellos es sinónimo de derecho a la propiedad, el derecho absoluto sobre está restringido por el cumplimiento de su función social.

6. Antes y después del frente nacional (1948-1978)

El arribo de los recién llegados se presentó desde la tercera década del siglo pasado, pero entre 1951 y 1964 logró su tope máximo. Coinciden así el crecimiento acelerado de la ciudad, el proceso de urbanización, las transformaciones económicas y el establecimiento bipartidista del Frente Nacio-

nal, todo ello asociado con la violencia que, como afirmamos anteriormente, azotó los campos y generó la mayor migración forzada, el éxodo hacia las ciudades. En este contexto, las políticas del Estado no solo tienen que ver con las causas del éxodo de los lugares de origen, sino se mantiene, se transforma y vuelve para reaparecer en los lugares de llegada. Les destierran los terratenientes rurales, y los reciben los lotetenientes urbanos. No son entendibles los gobiernos de este periodo sin el Estado de Sitio, el toque de queda, en fin, la violencia en el campo, y ahora la violencia en la ciudad que ilustra la incapacidad social y política, en esta y en la planeación urbana, para recibir la afluencia de campesinos.

De acuerdo con Bernal (1973), desde 1938 y hasta 1964, el crecimiento urbano fue mayor en los municipios de más de 10.000 habitantes; con el Frente Nacional estos tenían el 80% de la población urbana, las ciudades mayores atraían la población de las más pequeñas. En ese último año Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla despuntaban los 500.000 habitantes y concentraban más de las dos quintas partes de la población urbana y más de una cuarta parte de la total del país. Bogotá, entre en los periodos 1951-1964 y 1964-1973, tuvo la tasa más alta de crecimiento de todas las ciudades colombianas, creció mucho más que ellas. Según Reig (1979), la ciudad entre 1938 y 1958 triplicó su área y lo hizo otra vez en los siguientes tres años; desde entonces es la mayor receptora de esos migrantes y el lugar donde se dieron las mayores luchas y donde también se multiplicaron de manera más acelerada los barrios populares. Durante el Frente Nacional su población aumentó en cerca de 2.000.000 millones y su tamaño aumento 18.000 hectáreas.

Para mediados del siglo XX, los barrios populares se concentraban alrededor del área central de la ciudad, hacia el sur y hacia el noroccidente. Sus habitantes sufrían condiciones extremas de

necesidad y penuria tanto en términos de servicios públicos y hacinamiento, como de déficit de vivienda. (Molina, 1979; Arango, 1986; Torres, 1993). En 1964 dos quintas partes sobrellevaban estas circunstancias y, en 1973, se acrecentaban. Iniciando la década de 1970, según el informe Fase II nombrado anteriormente, se necesitaban 211.526 viviendas.

El mercado comercial se regía, como también ya se mencionó, por el sistema UPAC; así la oferta y la construcción de viviendas terminadas opacó la venta de lotes. Según Janssen (1984), de estas solamente alrededor de una quinta parte estaba dirigida a las clases populares. Las políticas públicas de vivienda estatal no fueron encaminadas a los subempleados, a los informales que hacían como podían para sobrevivir en la ciudad; desde este periodo la estabilidad económica y el no tener el perfil es el problema para tener acceso legal al suelo urbano, a la vivienda, a la ciudad. Ante este panorama las personas buscaron hacerse por cuenta propia a su lote, a su vivienda, a los servicios públicos, sin la aprobación de las autoridades. Acudieron para ello a vías no legales, a través de los barrios piratas y las invasiones.

Para Torres (2009), la ilegal y la pirata tienen en común la presencia de un actor externo, el desconocimiento de las normas y la inexistencia redes de servicios públicos; en la primera, la persona natural dueña del predio lotea y vende; en la segunda, un mercantilista o un grupo de ellos, se posesionan de un suelo rural limítrofe a los perímetros de la ciudad, por ello urbanizable y lo transfiere con promesas de compraventa. Las invasiones son organizadas individual o colectivamente bajo su propia decisión, se toman un terreno principalmente del Estado, como única forma de hacerse de una vivienda y a la subsistencia. En las tres, la construcción paulatina y realizada por los propios habitantes es lo común; es decir, los habitantes asumen la construcción de la casa

y también la dotación de los servicios públicos. Al final del Frente Nacional, la suma de estas tres modalidades proveía el 70% de la vivienda. Esa realidad de la urbanización pirata es bien vista por el Estado, ante ella es tolerante y laxo, o mejor cómplice dadas las relaciones entre los urbanizadores, los funcionarios y los políticos de los partidos tradicionales liberal y conservador. Estas urbanizaciones y la autoconstrucción se constituyen en 'válvula de escape' que le permite al Estado, primero, dispersar la presión generada por el crecimiento demográfico y por el déficit habitacional, economizarse los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, ocultar su incapacidad de ofrecer soluciones de largo aliento e impedir las invasiones (Torres, 1993). Contradictoriamente, su represión se dirige a quienes construyen y no a quienes venden. Los recién llegados solucionan el problema por su cuenta al no poder acceder a mercado de vivienda comercial o estatal. Las dos posibilidades que tuvieron para la consecución del terreno y la construcción de su vivienda fueron el mercado pirata y la invasión. Las invasiones, en Bogotá en comparación con otras ciudades colombianas y de nuestra América, fueron pocas y tuvieron su auge en la década de 1960.

La Central Nacional Provienda como organización de inquilinos nació en 1957 en Cali, reivindicando el derecho a la vivienda y a la ciudad, aunque había otros antecedentes en otras ciudades y regiones. Los pioneros eran militantes del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y del Partido Comunista (PC). Entre ellos Pedro Salas, Julio Rincón, Luis Morales, Alfonso Barbenera, Gabriel Escribano, Camilo Larrazábal Gerardo Molina y Hernando Garavito. En Cali se dio en torno a la resistencia a los desalojos y al apoyo a quienes se tomaban los ejidos, las acciones directas de los sintecho se apoyaron jurídicamente. Dos años después, con la presencia de algunos de estos pioneros, acompañados de otros dirigentes

obreros y políticos de izquierda fundaron la seccional Bogotá como parte del denominado trabajo de masas incluyendo algunas modificaciones organizativas. La Central fue reconocida mediante resolución del Ministerio de Justicia dos años después y empezó a expandirse a nivel nacional. Las primeras invasiones en Bogotá fueron: Las Colinas y Policarpa Salavarrieta (1961), Juan XXIII (1962); Salvador Allende y Santa Rosa (1963); Dorado, Quindío, Las Mercedes y El Consuelo (1964); El Progreso (1965) Atahualpa (1967); Camilo Torres (1970), Nuevo Chile y Los Olivos (1971). La Central tuvo relación con algunos de los procesos en estos barrios con otros no.

Estando Llinás de alcalde, los colonos ubicaron un predio de propiedad del Hospital San Carlos en las montañas frente a los barrios Quiroga, Santa Lucía y San Jorge y lo invadieron. Las Colinas fue la primera de todas las invasiones; allí la respuesta inicial de las instituciones fue la represión con las autoridades; posteriormente se amplió con las promesas de adjudicación con el ICT y CVP en Techo, hoy Kennedy, y finalmente, la intervención del párroco del barrio Quiroga y la persuasión con las JAC. Los ocupantes fueron llegando con los meses, en él no hubo un plan previo ni unos líderes claros, lo que permitió que llegaran personas con vivienda y con intereses lucrativos. Provienda estuvo presente solidariamente en este proceso, brindó apoyo, pero no tuvo el control. La invasión tuvo dos momentos, el primero fue en abril de 1961, los colonos que resistieron fueron los que realmente tenían necesidad y soportaron el cerco del ejército, ellos fueron la base para el segundo momento que fue definitivo en 1962; en este se organizaron comisiones para el control de los ocupantes; el punto de quiebre entre ambos fue la intervención del gobierno, el incumplimiento de sus promesas. (Arango, 1986; Torres, 1993)

Paralelamente y teniendo en cuenta esta experiencia se construyó el barrio Policarpa Salavarrieta

sobre el muro del costado sur del Hospital San Juan de Dios en el predio ocioso de la hacienda Tres Esquinas de propiedad del ICT a 10 cuadras de la Plaza de Bolívar. Rosa Quintero de Buena-ventura fue la primera en llegar con su familia; ella también había estado en la fundación de la seccional Bogotá. Con ella empezó la ocupación con casetas fijas; la estrategia era llegar en las noches con 1 o 2 familias y así se fue tomando todo el muro hasta que se copó, eso se hizo esquivando, convenciendo o aprovechando la ausencia de la policía. En ese año se invadió también la primera manzana en el centro del barrio; en sus esquinas se ubicaron Pedro Salas, José Medina, Mario Upegui y Gonzalo Pinto y también estaban entre otros Luis Morales, Efraín Sánchez y Laureano Ayala; en la segunda manzana se ubicaron Pablo Santos, Amadeo González, Prisciliano Gallegos y Rafael Luengas; en la tercera manzana se ubicó Ana Sarmiento, y en la cuarta hacia el centro del barrio, la familia Rodríguez. Así llegaron Ciro Bustos, Carlos Santamaría, Isabel Dimaté, María Antonia Peñaranda, Epifanio Galindo, José Pedraza, Pompilio Martínez, las familias Triana, Lozano y Linares (FIGURA 8).

En los siguientes años se inauguró la primera cancha deportiva que fue construida por las muje-

res; se hicieron desfiles y campeonatos, se le puso nombre al barrio; el ICT inicia las presiones y las demandas, la construcción de muros en los puntos de acceso; la CVP propone desalojos, aumenta la presión policial, en un enfrentamiento quedan dos heridos Carlos Santamaría y Flor Ojalora; con el apoyo de la Cámara de Representantes, el ICT suspende los atropellos, pero prohíbe a los invasores cualquier adjudicación o préstamo (FIGURA 9). Luego empiezan a funcionar las comisiones y hacerse efectivo el plan de trabajo; como no había servicios, comienzan a funcionar las letrinas, los hornos de basuras y se empiezan a demarcar las vías y a sembrar árboles. Todas las tentativas de desalojarlos no fueron efectivas, al contrario, poco tiempo después ya habían más de 160 casas, se cambió la estrategia de las casas fijas por las móviles, se aumenta el número de familias a 10, y se usan las fechas históricas para hacer la ocupación (FIGURA 10); se ponen en funcionamiento las piletas de agua; se irrumpió también el puesto de policía y se puso a funcionar la primera escuela; los servicios se pusieron de contrabando, el alcantarillado se realizó con trabajo voluntario, y con el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional. El acoso del ICT continua a partir de ofertas y de intentos para enfrentar a los pobladores con esa

FIGURA 8. Algunos líderes de Cenapro.

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO CENAPROV

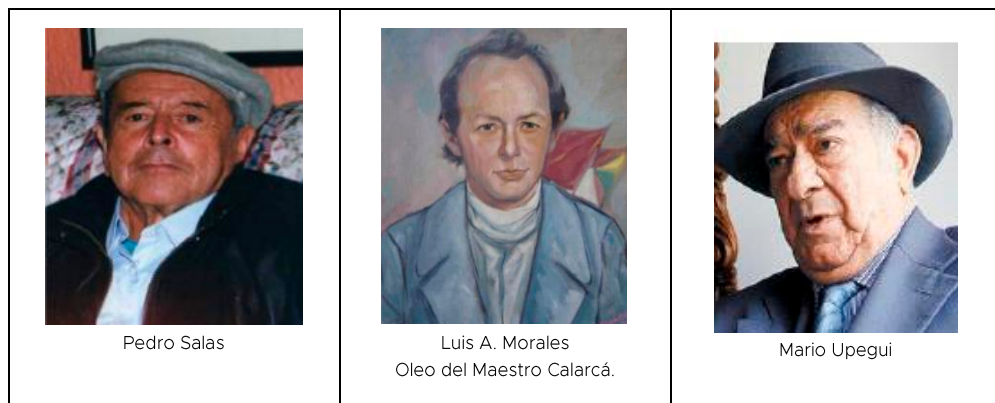
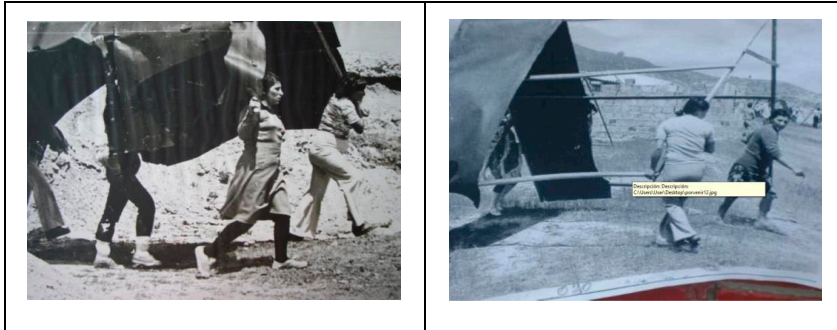


FIGURA 9. Algunas Policarpas del barrio.
FUENTE: NARANJO, 2017



FIGURA 10. Casas móviles.
FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO CENAPROV



institución; poco después empezó a funcionar la casa cultural y el colegio.

En 1966 se consolidó la posesión. Eso se da cuando el 8 de abril, el viernes de semana santa, denominado ‘viernes santo sangriento’, Provienda motivada por los resultados obtenidos donde tenía presencia, promueve la invasión de un terreno cercano, en el barrio Country Sur, con más de 200 familias, pero gracias a una delación el intento fracasa, se presenta una gran represión con detenidos, golpeados y muchos decomisos. Ante la situación, los vecinos del barrio primero les alojan en la casa cultural y luego les adjudican los terrenos desocupados en el mismo barrio; para lograrlo cambian otra vez de estrategia deciden hacerlo de día, en el cambio de guarda antes del

mediodía; pensando en que dada la religiosidad se pusieron imágenes y banderas blancas en el costado oriental sobre la carrera décima, pero a la vez se organizaron diferentes actividades para realizar la resistencia: el agua caliente, las antorchas con ACPM, la piedra, las caucheras, los garrotes y varillas, los trapos mojados en alcohol y vinagre para protegerse de los gases lacrimógenos, las armas de defensa, la comida, la invitación a periodistas nacionales y extranjeros y el plan de escape; todo esto se acompañó de la programación de una asamblea informativa al final de la mañana.

A pesar del anuncio del Secretario de Gobierno de que no iba a pasar nada, la policía empezando la tarde inicia el desalojo; entraron primero los escuadrones con bolillos, luego la caballería y

después los gaseadores y los escuderos, a todos se les dio respuesta y se armó la batalla; ante la respuesta los uniformados retroceden y vuelven a arremeter, pero al final la cuestión se decide por la presencia de grupos solidarios de estudiantes, sindicalistas, vivendistas, comunales entre otros; la policía queda entre fuegos y terminando la tarde el alcalde Gaitán Cortes da la orden de retirada (FIGURA 11). El balance tres muertos, un adulto Luis Vega y dos niños de barrios vecinos, más de 150 heridos, varios detenidos, casetas destruidas e incendiadas, la orden de captura contra las directivas de Provienda y el regocijo por el triunfo político y organizativo, por la permanencia y conservación del territorio, en fin, por la ganancia lograda a partir de la solidaridad y valor, la conquista del derecho a la vivienda y a la ciudad; se adjudicaron lotes a los que permanecieron en la lucha. Después de esto se consolidaron las viviendas, se realizaron las obras de infraestructura de servicios, se fortaleció la organización interna. También vinieron las contradicciones entre ocupantes y compradores, entre la Central y los integrantes de otros partidos

políticos (Arango, 1986; Torres, 1993; Salas, 1998; Varela, 2011; Oviedo, 2012; Naranjo, 2017).

Posteriormente en Bogotá Cenaprov apoyó los procesos de otras invasiones. La primera de ellas fue el barrio Salvador Allende, ubicado en la parte aledaña de la Carrera 68 y la Avenida Primero de Mayo; se inició como urbanización pirata en 1963 por parte de Crispin Perea y Carlina López quienes tenían beneficios económicos personales y políticos para el Partido Liberal, conocida como urbanización Alquería-La Fragua, con la venta de lotes a buenos precios y con condiciones de pago ventajosas, pero después de instaladas las familias les pedían nuevas cuotas. Los urbanizadores aprovecharon las actividades de un grupo de familias que habitaban en un humedal y adelantaron trabajos colectivos para su adecuación; los urbanizadores tenían el apoyo de algunos policías y funcionarios oficiales. Inicialmente, la labor de Cenaprov consistió en la defensa y organización de los colonos, y la denuncia de los embaucadores, en un escenario en que hacían presencia los partidos tradicionales liberal y conservador y otros; posteriormente, en

FIGURA 11. Respuesta estatal, represión policial.

FUENTE: ARANGO, 1986



los estrados judiciales con la asesoría de abogados como Hermelinda Castellanos, Carlos Duica, Nicolás Cabrera y Humberto Criales se impidieron diferentes desalojos y se logró tiempo después que esos terrenos fueran de utilidad pública.

El segundo barrio es El Quindío ubicado en la carretera oriente que comunica la ciudad con Villavicencio. El terreno estaba en pleito de sucesión entre el dueño Eduardo Morales, el urbanizador pirata Rogerio Amaya, y las familias adjudicatarias. El urbanizador; desde 1963 vendió lotes, pero incumplió con los servicios y con la entrega del título de propiedad. Los colonos encabezados por Rosa de Vélez acudieron a la Central y para el siguiente año, con su apoyo y la ayuda de abogados, se logró ganar las demandas del urbanizador; un año más tarde el número de casetas y de familias se incrementó; el proceso organizativo fue similar al del barrio Policarpa, fue liderado por una Junta Directiva y se basó en la conformación de unas comisiones, los métodos de lucha estaban afinados y eran más efectivos, así se consolidó para 1968. Para 1972 se dio una nueva ocupación conocida como Gran Quindío o Nuevo Quindío con familias desalojadas de las orillas del río Tunjuelito del barrio Perpetuo Socorro en Kennedy próximos al Nuevo Chile (FIGURA 12).

El tercer barrio es el Atahualpa ubicado en Fontibón. Allí el urbanizador pirata Álvaro Abondano en 1967 estafó a 155 familias y no les entregó ningún título de propiedad ni les instaló ningún servicio público. Con el apoyo de la Central otras familias se tomaron los predios sin construir. Los años pasaron entre demandas, desalojos estimulados por el urbanizador, y la expropiación de los terrenos gracias a la organización de los habitantes, y al apoyo de concejales de la oposición como Carlos Bula lo que sucedió en 1970 (FIGURA 13). Ese mismo año varias familias de recicladores de basura de manera espontánea invadieron una propiedad de Ferrocarriles Nacionales en el barrio Quinta Paredes, al occidente de la ciudad que luego se conoció como Camilo Torres, el cuarto barrio. Estos solicitaron el apoyo de Cenapro en el momento que empiezan los desalojos y la campaña de prensa en su contra, su labor en este caso consistió primeramente en el mejoramiento de las viviendas en cuanto a materiales, luego lograron la posesión del terreno, la instalación de los servicios públicos y la construcción de algunos equipamientos. La presencia de la central fue tardía, y terminó de manera temprana ante la disolución de los habitantes.

FIGURA 12. Familia del barrio El Quindío en 1973. Barrio El Quindío.

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO CENAPROV



FIGURA 13. Niñas del barrio Atahualpa.

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO CENAPROV



El último barrio dentro del periodo estudiado, es el barrio Nuevo Chile. Este se corresponde con el cambio en las estrategias de Cenaprov en las luchas por el suelo urbano de una manera más planificada, en su entendimiento de las tendencias en los barrios populares; este cambio se fundamenta también en las experiencias de los barrios Las Colinas, Policarpa Salavarrieta y El Quindío. La transformación consistió en el abandono de las invasiones de terrenos, de las tomas directas de tierra y su sustitución por las vías legales que implicaron las negociaciones con sus propietarios, con la denominada compra comunera por los integrantes de la Central. El Nuevo Chile se corresponde con la adquisición de un terreno en los bordes entre Kennedy y Bosa de la empresa Carboquímica en 1971.

Las dinámicas organizativas de este barrio y de los anteriores fueron similares a las del Policarpa Salavarrieta que se constituyó con el tiempo en el referente, en cuanto a la adquisición de los servicios públicos y a las construcciones necesarias; también fueron similares las estrategias de las autoridades, combinando represión policial, cooptación y división, las diferencias con otras organizaciones políticas y la solidaridad de otros movimientos

sociales. Las primeras familias compraron con la asesoría de la Central unas mejoras, pero a pesar de que estas tenían contratos de arrendamientos o documentos de posesión, la policía incendió las casetas y realizó varias detenciones en dos ocasiones. En la última, los detenidos decidieron instalarse en la cárcel, denunciando no tener a donde ir y ante la destrucción de las casetas fue así como, con el apoyo de concejales de izquierda como Carlos Bula, y de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), se logró la orden del alcalde menor Fonseca de devolver los materiales incautados y el retorno de las familias a los terrenos ocupados legalmente. Con el tiempo se presentaron enfrentamientos violentos con la junta de acción comunal, pero la central salió airoso, entonces con el trabajo colectivo se realizó la entrada al barrio, hasta ese momento aislado, y se construyeron equipamientos con auxilios de políticos cercanos al proceso como Mario Upegui, Teófilo Forero y Gilberto Vieira (FIGURA 14).

Tres aspectos para resaltar antes de cerrar: las relaciones de ayuda y solidaridad no solo se dan entre Cenaprov y otras organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, culturales y políticas, sino entre los barrios y sus habitantes que la tienen a ella como matriz, pues entre ellos poco a poco se configuró con el tiempo una red que funcionaba

FIGURA 14. Salón cultural del barrio Nuevo Chile.

FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO CENAPROV



permanentemente; las dinámicas de los urbanizadores piratas no son exclusivas de los sectores populares, familias con mayores recursos económicos fueron sus víctimas a principios de la década de los 70 cuando estos les vendieron lotes cercanos a la Autopista Norte con Avenida Pepe Sierra que dieron origen a los barrios Mónaco y Batán; finalmente, de acuerdo con Naranjo (2017), en este momento se da el auge de Cenaprov en otras ciudades, municipios y departamentos.

Las invasiones fueron una de las expresiones de enfrentamiento e inconformismo popular, una forma de manifestación del conflicto contra el Estado que se hizo presente durante el Frente Nacional y que se generalizó desde entonces cada vez más. Las invasiones son escasas en Bogotá, pero revelan dos contradicciones fundamentales: las limitaciones de las políticas públicas urbanas y de vivienda, así como las asociadas a la propiedad privada, individual y exclusiva del suelo urbano al servicio de la ambición de los poderosos, y la necesidad de ese suelo urbano como bien de uso imprescindible a nivel colectivo, y como tal están relacionadas con formas de modernización desde abajo. Estas se relacionan con las luchas populares urbanas en tanto alternativa de los recién llegados sin techo para lograr soluciones al problema que afecta sus derechos. Las invasiones son experiencias de autonomía, fueron un antecedente de las acciones populares masivas posteriores, aunque no fueron constantes. Dichas luchas sociales son acciones colectivas críticas en cuanto buscan el reconocimiento de sus derechos fundamentales como forma de presionar por respuestas de las autoridades; son una forma de resistencia contra las elites políticas y económicas que prepararon y precedieron una ola de protestas más sostenidas en el tiempo y en el espacio y que se fueron acrecentando en el país. No es casual que estas protestas aumentaran durante los dos gobiernos liberales: el de Lleras Camargo (1958-1962) y el

de Lleras Restrepo (1966-1970) y disminuyeran durante los periodos de los conservadores de Valencia (1962-1966) y de Pastrana (1970-1974), (Torres, 1993; Almeida, 2020).

Dentro de las modalidades de protesta más presentes en Colombia están los paros cívicos y el bloque de vías que representaron en el periodo 16%, casi las dos quintas partes del total; se iniciaron antes del gobierno de Lleras Camargo como una forma de protesta y presión en busca de solución a los problemas que afectan a una cantidad significativa de ciudadanos; es asumida por barrios o un conjunto de ellos y se presentaron por diferentes causas como por la afectación de un programa de intervención, por el retiro de botaderos de basura, o por la destitución de un alcalde menor; los hubo en diferentes ocasiones en la vía Usme, en la vía oriente, en la autopista sur, en la Caracas, en la carretera a Suba; una segunda modalidad es la resistencia a desalojos; se presentaron 12 casos que representa alrededor del 30% del total, fueron llevados a cabo por pobladores organizados que ya tenían su vivienda gracias a la invasión de terrenos, pero habían sido engañados por urbanizadores piratas; en ella se evade la confrontación con la policía, se usan elementos simbólicos pabellones nacionales o banderas blancas, entre otras; en ellas participan habitantes de otros barrios, representantes de otras organizaciones populares y, a veces, algún líder político; el mejor ejemplo de esta es la lucha librada entre 1972 y 1974 contra el Plan Cerros, denominado Plan Integrado de Desarrollo Urbano (PIDUZOB), en la zona oriental; la tercera modalidad fueron las manifestaciones pacíficas; se presentaron en 11 situaciones, que representan un poco más del 25%; están asociadas con marchas, concentraciones y tomas para forzar soluciones a un problema común como la vivienda, tuvieron lugar en el mismo barrio, en espacios públicos externos o en las sedes de las empresas o instituciones, implica menor esfuerzo

y mayor seguridad de quienes participan. Además de estas modalidades hubo otras. Entre los motivos de los conflictos están los intentos de desalojo, los vinculados con el transporte, a los servicios públicos y a las disposiciones del gobierno.

Como es evidente los barrios populares cumplen un papel central en la ciudad. El barrio se comprende como unidad de las prácticas y de las representaciones de sus propios habitantes, como una producción dialéctica de lo social, como una construcción de las relaciones sociales en las que predomina el valor de uso de quienes lo habitan y lo practican (Lefebvre, 1974). Los barrios se entienden como territorios populares, como espacios comunitarios con los que se tiene apropiación, una identidad (Torres, 2014).

7. Consideraciones finales

Como vemos el Frente Nacional fue un acuerdo entre los líderes de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que no tuvo en cuenta a las masas populares. Esas élites políticas no solo desconocieron, sino que estigmatizaron y excluyeron las bases y solo acudieron a ellas para ratificar las decisiones tomadas. A partir de la irrupción del 9 de abril desconfiaron y temieron su afirmación por fuera de las dirigencias. La violencia no solo es instrumentalizada por esas élites para aprovecharse de las capas populares de la población para engañarlas, movilizarlas y utilizarlas en favor de sus intereses hasta el extremo de su propia muerte y su sacrificio; como los campesinos no son objetos, ni agentes pasivos, son sujetos sociales, toman la violencia como su propio proyecto, como víctimas y victimarios a la vez, la toman como afirmación de su autonomía. La movilización popular en las ciudades no es de la población urbana sino de la que fue desterrada, mejor, desterritorializada de los campos.

La violencia también pone en evidencia como estas élites, a través del Estado, no son capaces de contener el éxodo de los migrantes ni de administrar la ciudad (la estructura urbana) en ese contexto. La ciudadanía que se estaba formando lo hizo en el marco de la represión y del control, del Estado de Sitio, mientras en la planeación urbana se posicionan grupos de tecnócratas para darle respuesta a los problemas urbanos. Bogotá estaba tranquila, serena mientras el campo se desangraba. El acontecimiento del 9 de abril incrementó la violencia y la represión; el Estado de Sitio y el toque de queda son usados por el Estado y todos ellos facilitan el paso de la aldea a la ciudad, al desarrollo capitalista en general. Con él la ciudad, el espacio urbano, la población y la sociedad misma se transforman. Las élites, la naciente burguesía liberal y los sectores tradicionales de la oligarquía terrateniente conservadora realizan el acuerdo para lograr la victoria y con ello controlan el auge político de las masas populares, pero también implementan ese control sobre la producción y distribución de la ciudad, del espacio urbano. Las masas populares se involucran en esa lucha y su apropiación del espacio se torna en reivindicación política. Tanto las masas populares como las élites, no se reconocen en ese espacio urbano.

Esas élites, después el 9 de abril de 1948, y más en el Frente Nacional para solucionar el problema, construyen la ciudad, no para los recién llegados, para las masas populares, sino para facilitar la marcha del capitalismo. La planificación y la zonificación son las bases de la modernización descendente de la ciudad y se hacen sin la participación de la mayoría de la población. Esa planificación y zonificación sirven de base para la segregación: las élites, los sectores bien o de la gente de bien, al norte, las masas populares en el sur y en el suroriente, las clases medias en el occidente. La acción del aparato represivo, la militarización de la vida ciudadana expulsa a la

gente de las calles y del centro, mientras la planificación y zonificación acaban con el sentido colectivo del espacio público, y de la ciudad como encuentro en un lapso muy corto.

Paralelamente, en ese mismo lapso y las masas populares después del éxodo, no encuentran las condiciones de albergue en la ciudad. Por supuesto, la ciudad estaba saturada, por supuesto también no estaba preparada para recibir las, la ciudad está por construirse, así como la sociedad. Esas masas, primero tenían en general una concepción de territorio, asociada con su parcela, con su fundo, y pasan a la carencia de horizontes, al hacinamiento, a la estrechez; segundo, no traían y no encontraron un entorno y un espacio habitable, tampoco lograron estabilidad en el trabajo. Entonces empiezan a construirlo por cuenta propia tomándose la ciudad existente con sus barrios poniendo en práctica en el nuevo escenario sus relaciones sociales; allí la vivienda, en términos materiales y afectivos, se hace construcción social,

se forja como estabilidad familiar y, a la vez, como posibilidad de trabajo, como valor de uso, como patrimonio, se construye simultáneamente con el barrio como dimensión social del territorio como posibilidad y experiencia del habitar; es decir, como utopía concreta,

En el barrio de invasión la acción institucional solo se hace presente al final y solo para hacer control; los recursos de sus habitantes son escasos y poco constantes, desempeñan ‘oficios inútiles’; sus integrantes antes de llegar allí no se conocen, o lo hacen muy poco, son grupos heterogéneos, con orígenes y procedencias múltiples, es decir cada una, cada uno de ellos llega al grupo, como al lugar y lo que lo identifica con los otros es su condición de lugar en el mundo. Cuando para construir ese barrio de invasión hay una organización como el caso de Provivienda, las identidades sociales y políticas se convierten en una alternativa no solo para acceder al derecho a la vivienda, sino el derecho al territorio, a la ciudad.

8. Referencias citadas

- ALMEIDA, P. 2020. *Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva*. Buenos Aires, Argentina
- APRILE-GNISET J. 2007. “Memoria del destierro y del exilio”. Ponencia presentada en la Cátedra Jorge Eliecer Gaitán. Bogotá, Colombia.
- APRILE-GNISET J. y MOSQUERA, G. 1978. *La ciudad colombiana: Siglo XIX Y siglo XX*. Biblioteca Banco Popular. Bogotá, Colombia.
- ARANGO, S. 1989. *Historia de la arquitectura en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia
- ARANGO, C. 1986. *La lucha por la vivienda en Colombia*. ECOE Ediciones. Bogotá, Colombia
- BECHT, B. 1934. *Preguntas de un obrero que lee*. Poema.
- BERMAN, M. 2002. *Aventuras marxistas*. Siglo XXI editores. Madrid, España
- BERMAN, M. 1988. *Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI editores. Madrid, España
- BERNAL, S. 1973. “Algunos aspectos sociológicos de la migración en Colombia”. En: R. CARDONA (ed.), *Las migraciones internas*. División de Estudios de Población. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Bogotá, Colombia.
- BOZZANO, H. 2017. *Territorios posibles. Procesos, lugares y actores*. Ediciones Lumiere. Buenos Aires, Argentina.

- CARDONA, R. 1973. "Los asentamientos espontáneos de vivienda aspectos sociales de los programas de mejoramiento". En: R. CARDONA (ed.), *Las migraciones internas en América Latina*. Corporación Centro Regional de Población. Bogotá, Colombia.
- CARVAJAL, N. 2011. "Enfoques ascendente y descendente del ordenamiento territorial en Colombia". *Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía*. 20(1): 57-72.
- CORREDOR, C. 1992. *Los límites de la modernización*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- ESTRADA, V. 2015. *¿Cuántos somos? Una historia de los censos civiles y de la organización estadística en Colombia en la primera mitad del siglo XX*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
- FERREIRA, D. 2014. *Rebelión de los oficios inútiles*. Alfaguara. Bogotá, Colombia.
- GATTAI, Z. 1979. *Anarquistas, graças a Deus*. Edición digital C. Carretero. Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Rio de Janeiro, Brasil.
- GILBERT, A. y C. ZORRO. 1979. "Normas jurídicas y realidad social: la evolución reciente de las disposiciones en materia de urbanismo en Bogotá". En: *La problemática urbana hoy en Colombia*. Serie teoría y sociedad No. 7. CINEP. Bogotá, Colombia.
- GONZALEZ, G. M. 2009. *Gestión de los asentamientos informales: un asunto de política pública*. Facultad de arquitectura. Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia.
- HARDOY, J. y D. SATTERTHWAITTE. 1987. *La ciudad legal y la ciudad ilegal*. Instituto Internacional del Medio Ambiente. Buenos Aires, Argentina.
- HARVEY, D. 2003. *Espacios de esperanza*. Ediciones Akal. Madrid, España.
- HARVEY, D. 2004. *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina.
- HARVEY, D. 2008. *Paris capital de la modernidad*. Ediciones Akal. Madrid, España.
- JANSSEN, R. 1984. *Vivienda y luchas populares en Bogotá*. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, Colombia.
- INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL (ICT). 1995. *Medio siglo de vivienda social en Colombia 1939-1989*. Ministerio de Desarrollo Económico. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE. Bogotá, Colombia.
- LEFEBVRE, H. 1974. *La production de l'espace*. Anrothos. París, France.
- LICHILIN, A. A. 1998. El acontecimiento del 48. Cuadernos de la capital. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Bogotá, Colombia.
- LICHILIN, A. A. 1997. La plaza mayor de Santa Fe de Bogotá. Un equipamiento entre la cuadrícula y la cuadriculación. Cuadernos de la capital. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Bogotá, Colombia.
- MANRIQUE, M. X.; PEREA, S. A.; PLAT, S. y J. M. BUENO. 2016. *Cazucá. De lo informal al mejoramiento integral*. Consejo Profesional Nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares. Universidad Piloto de Colombia. Bogotá, Colombia.
- MOLINA, H. 1979. *Colombia: vivienda y subdesarrollo urbano*. CPUFINISTRO. Bogotá, Colombia.
- MUJICA, E. 1984. *Bogotá de las nubes*. Biblioteca Digital de Bogotá. Bogotá, Colombia.
- MUSSET, A. 2014. "El mito de la ciudad justa: una estafa neoliberal". En: *Retos del hábitat. Por la vida, la equidad y los derechos territoriales*. Universidad Nacional de Colombia Medellín, Colombia.

- NARANJO, M. E. 2017. *Colonos, comunistas, alarife y fundadores en Colombia: una historia de la central nacional Provivienda CENAPROV (1959-2016)*. Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Tesis de Grado.
- OVIEDO, A. 2012. *Memoria y luchas urbanas. Por el derecho a una vivienda digna. Historia de vida de Mario Upegui*. Ediciones Izquierda Viva. Bogotá, Colombia.
- PERALTA, E. 2017. *Torturas. Lágrimas y sangre. Las guerras campesinas de Villarrica*. Olmedo Rodríguez. Ibagué, Tolima.
- PEÑA, L. B. 2001. "Teorías del desarrollo". *Cuadernos de geografía. Revista Colombiana de Geografía*, X(1-2): 201-235.
- REIG, M. 1979. "La proyección de la coexistencia de formas de producción de vivienda sobre morfología urbana. Caso Bogotá". En: H. MOLINA. *Colombia: vivienda y sub-desarrollo urbano*, CPUFINISTRO. Bogotá, Colombia.
- SALAS, P. A. 1998. *Policarpa. En una noche amanecía un barrio. Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá*. Departamento Administrativo de Acción Comunal. Bogotá Historia Común. Bogotá, Colombia.
- SALDARRIAGA, A. 2000. *Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana*. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá, Colombia.
- SANCHEZ, L. M. 2008. "Éxodos rurales y urbanización en Colombia. Perspectiva histórica y aproximaciones teóricas". *Revista Bitácora*. Bogotá, Colombia. 13: 57-72.
- SANCHEZ, L. M. 2007. Migración forzada y urbanización en Colombia. Perspectiva histórica y aproximaciones teóricas. *Seminario Internacional Procesos urbanos informales*. Bogotá, Colombia. (31 de octubre, 1 y 2 de noviembre).
- TORRES, A. 2014. "Territorios populares urbanos como espacios comunitarios". En: P. M. BURBANO y P. PÁRAMO (Comps.), *La ciudad habitable: espacio público y sociedad*. pp. 107-132 Universidad Piloto. Bogotá, Colombia.
- TORRES, C. 2009. *Ciudad informal colombiana. Barrios contruidos por la gente*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia
- TORRES, A. 1993. *La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá. 1950-1977*. Bogotá, Colombia.
- TURNER, J. F. 1969. "Asentamientos urbanos incontrolados: problemas y políticas". En: BREESE (ed.), *La ciudad en los nuevos países en vías de desarrollo: lecturas sobre el urbanismo y la urbanización*. Prentice Hall. New Jersey, USA.
- TURNER, J. F. 1966. "Asentamientos urbanos no regulados". *Cuaderno de la Sociedad Venezolana de Planificación*, 36: 1-86.
- VARELA J. S. 2011. *La historia de un lote. Barrio Policarpa Salavarrieta*. Rodríguez Quito Editores. Bogotá, Colombia.
- VERNEZ, G. 1976. "Traslados residenciales de los inmigrantes de bajos ingresos: el caso de Bogotá, Colombia". En: R. CARDONA (ed.), *Las migraciones internas*. División de Estudios de Población, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Bogotá, Colombia.